

F

LATINOAMÉRICA

volumen 9 • número 4
octubre-diciembre de 2009

La crisis de Honduras y el sistema interamericano: el triunfo del realismo sobre los principios

Raúl Benítez Manaut

La crisis de Honduras y el sistema interamericano: el triunfo del realismo sobre los principios

Raúl Benítez Manaut

n

Hacía más de 15 años que un golpe de Estado no tenía éxito en América Latina. En abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori decretó la disolución de las dos Cámaras del Congreso peruano, lo que se interpretó como el golpe de un poder del Estado sobre otro. En 1993, el Presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, intentó algo similar, pero fracasó y tuvo que renunciar a la presidencia y exiliarse. El 11 de abril de 2002, un intento por derrocar a Hugo Chávez fracasó 3 días después. En Haití, el general Raoul Cedrés expulsó al presidente Jean-Bertrand Aristide y logró sobrevivir a un gran embargo internacional; el regreso de Aristide se negoció en la ONU. En enero de 2004, tras una prolongada crisis de gobernabilidad, en un segundo aire de gobierno, el presidente Aristide fue “invitado” a salir de su país por un comando militar de Estados Unidos, respaldado por Francia; el presidente haitiano estaba tan cerca de ser derrocado por sus opositores y por turbas enfurecidas, que aceptó de mala gana el destierro y después trató, sin éxito, de argumentar que se había violentado la soberanía del Estado. En Ecuador, debido a una casi permanente crisis de gobernabilidad, han caído, renunciado o se han revocado presidentes, pero no se puede afirmar que esto haya sido producto de golpes de Estado o que se hubiera fraguado por los militares. Se pensaba que los cuartelazos eran cosa del pasado. Sin embargo, a inicios de 2009, se gestó un intento de desestabilización

Raúl Benítez Manaut es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

del presidente de Guatemala Álvaro Colom, que tampoco logró consumarse, pero estuvo cerca.

Por ello, el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009, y la forma como fue capturado en la casa presidencial, obligado a salir del país y trasladado a la fuerza a Costa Rica, está poniendo en crisis los principios del sistema interamericano, como la defensa de la democracia, el respeto a las decisiones de los pueblos cuando eligen a sus gobernantes y, también, el respeto a las Constituciones y leyes de los países. El gran cometido hemisférico para evitar que, ante situaciones de ingobernabilidad o de polarización política, se derroque a los presidentes consistirá en lograr el regreso de Zelaya a su cargo constitucional.

En Honduras, los militares fueron el instrumento ejecutor final de un sofisticado golpe de Estado oligárquico, contrario a lo que postula la doctrina democrática, según la cual los militares debieron mantenerse apolíticos: la prueba de fuego de las relaciones civiles militares está en ser fiel a la cadena de mando, obedeciendo a los gobernantes elegidos democráticamente. El principal asesor jurídico del ejército de Honduras, en una excepcional declaración de realismo, señaló: “Cometimos un delito al sacar a Zelaya, pero había que hacerlo”. O sea, en Honduras se expulsa al Presidente por no acatar las leyes mediante la comisión de delitos.

Durante la Guerra Fría, era clásico que el ejército derrocara a los presidentes. Se trataba de un segmento de poder del Estado —el que detenta las armas— contra el resto, y generalmente los militares derrocaban presidentes, disolvían congresos, decretaban estados de sitio y reprimían cualquier resistencia que proviniera de los partidos políticos, los sindicatos o los movimientos populares. El golpe de Estado de Honduras es muy distinto: en éste actuó todo el Estado contra un segmento, el ejecutivo. En Honduras, las violaciones a los derechos humanos son quirúrgicas, no masivas como en el pasado, y los golpistas tienen a su favor a los poderes institucionales y fácticos, como los medios de comunicación, los empresarios, el clero y muchos sectores sociales. En otras palabras, el retroceso de Honduras se da por el retorno abrupto al sistema político bipartidista oligárquico de los años ochenta, que excluye de nueva cuenta a los sectores populares o de izquierda.

el petróleo envenenado

Manuel Zelaya era (y es) el eslabón débil de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (al ba). A diferencia de los presidentes de otros países que componen la alianza —como Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y Rafael Correa de Ecuador, quienes se mostraron abiertamente simpatizantes del al ba desde sus campañas electorales y ganaron la presidencia abrazando el giro de su política exterior a favor de Hugo Chávez—, Zelaya ganó las elecciones del 27 de noviembre de 2005 sin mencionar la intención de participar en el al ba. Un año y medio después de su ascenso a la presidencia, Honduras ingresó a Petrocaribe, cuando los precios del petróleo iniciaron su ascenso vertiginoso y llegaron a casi 150 dólares por barril a me-

diados de 2008, con lo que el gobierno se ahorró millones de dólares por las reducidas tasas de interés y sustituyó a los viejos distribuidores Chevron, Exxon Mobil y Shell. A la par, Zelaya reforzó sus vínculos diplomáticos con Venezuela y Nicaragua, inició una retórica antiimperialista similar a la de Chávez y con ello acentuó la división en su partido político, el Liberal, al cual también pertenece el presidente de facto Roberto Micheletti. Con este discurso, el presidente Zelaya se fue divorciando de las estructuras de la tradicional oligarquía política y económica del país.

En agosto de 2007, Zelaya invitó a Honduras a los presidentes de Venezuela y Nicaragua, y comenzó la profundización de sus relaciones con el alba, además de seguir el estilo político de Hugo Chávez; sus críticos lo percibieron como un imitador transformado en megalómano, que se expresó en el arranque de campañas similares a la del Presidente venezolano, incluidos largos discursos en televisión. Por ello, para paliar una gigantesca crisis financiera, este país extremadamente pobre encontró un respaldo económico y político en Venezuela, para lo cual necesitó refundar las bases y sus soportes de poder, dirigiéndose a los sectores populares, separándose de los grupos tradicionales de poder (de los cuales él mismo forma parte) e iniciando un proceso de gran polarización política. En ese momento, parecía que el alba se expandía y que Venezuela fortalecía su política exterior. La pregunta que queda abierta es si Zelaya se volvía bolivariano por convicción o por necesidad.

La polarización progresiva

La polarización se agravó a medida que Zelaya ponía en práctica medidas similares a las de sus colegas, los presidentes del alba: el intento de cambio de la Constitución para permitir la reelección presidencial se convirtió en el epicentro de la crisis que culminó en su derrocamiento. En otras palabras, Zelaya se fue aislando y alejando de los poderes que han controlado tradicionalmente las estructuras del Estado hondureño. Al mismo tiempo, los poderes judicial y legislativo se opusieron abiertamente al Presidente y apelaron al clero, a los empresarios y a sectores de las clases medias; para cerrar la pinza, a fines de junio de 2009, los mandos militares finalmente optaron por aceptar los dictados de la Suprema Corte y el Congreso. Los militares enfrentaron una contradicción acerca de a quién le debían guardar fidelidad, y terminaron aceptando los argumentos de los otros dos poderes del Estado sobre la inconstitucionalidad del esfuerzo de Zelaya por realizar un referéndum para agregar una urna adicional en las elecciones del 29 de noviembre, conocida como la “cuarta urna”.

El temor a las reelecciones indefinidas de los presidentes del alba se volvió el talón de Aquiles de Zelaya. Si a Correa y a Morales les había dado buen resultado la propuesta reeleccionista, debido a que las mayorías aceptan su sólido liderazgo y las oligarquías se resignan a la realidad, en Honduras esta situación no se replicó, precisamente porque su ingreso al alba no contó con el respaldo de la población, y la oligarquía se sintió traicionada cuando uno de los suyos se fue mudando poco a poco hacia la izquierda.

Para romper con los grupos tradicionales de poder, cualquier Presidente de América Latina debe medir la correlación de fuerzas y la viabilidad de ese viraje, so pena de abrir heridas que parecían cerradas y que llevan a los grupos poderosos a fraguar el derrocamiento de quien decide dar ese giro radical, aunque haya sido elegido en un proceso democrático. Por ello, quien perdió en Honduras fue la democracia edificada con grandes esfuerzos desde inicios de la década de los ochenta, y arrastra tras de sí al proceso de integración centroamericano, de por sí apabullado y cuestionado, además de que se debilitan los elementos centrales de los consensos hemisféricos.

el sistema interamericano y sus desventuras

Fue tan *sui generis* y rápido el derrocamiento de Zelaya el 28 de junio, que dejó a la gran mayoría de los gobiernos del continente sin capacidad de respuesta. Se dio un novedoso tipo de golpe de Estado: los golpistas invocaron la ley y la violación de ella por el Presidente, y se aventuraron a derrocar a Zelaya convenciendo a las fuerzas armadas. Argumenta el gobierno de facto contar con una unidad nacional y con capacidad para controlar al país. A su vez, Zelaya inició desde el exilio una intensa campaña para lograr el respaldo de la comunidad hemisférica de naciones. Su eje fue la Carta Democrática Interamericana. Por razones de principios políticos, en América Latina no se puede aceptar a un gobierno que emerge de una conspiración oligárquica y militar. Sin embargo, tampoco se puede intentar derrocar a un gobierno de facto mediante el uso de los mismos medios —la fuerza—, como lo insinuó Hugo Chávez al día siguiente del golpe.

Casi todos los países retiraron a sus embajadores. El Presidente de Costa Rica diseñó un ambicioso plan de retorno de Zelaya, denominado Plan Arias, que ha sido rechazado por los golpistas una y otra vez por ser inflexible en el postulado del retorno del Presidente exiliado. Antes de su exitoso retorno el 21 de septiembre¹ y su refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Cristina Kirschner prestó el avión presidencial para intentar aterrizar en Tegucigalpa, y Zelaya inició un periplo, apoyado por un avión peregrino y los recursos de su amigo Hugo Chávez, para aislar a los golpistas infructuosamente. Esto se acompañó de intentos “kafkianos” para ingresar a través de un pequeño pueblo fronterizo nicaragüense.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (oea), en dos visitas a Tegucigalpa, también intentó sin éxito convencer a Micheletti de la necesidad de retroceder y aceptar a Zelaya para aplicar el Plan Arias. Todo ello derivó en la poca efectividad de la intención de aislar al gobierno de facto y, por el contrario, éste parecía consolidarse día tras día, hasta antes del 21 de septiembre. Lo anterior demuestra que lo externo es un factor importante, pero no decisivo, cuando se trata de presionar, aislar o intentar obligar a un gobierno a que cambie de

¹ La versión final de este artículo se entregó el 30 de septiembre de 2009.

rumbo, haya llegado al poder por el medio que sea. También demuestra que Zelaya sólo podía jugar la carta del “retorno no negociado” para lograr cambiar la correlación negativa de fuerzas.

Un gobierno aislado de su entorno puede sobrevivir. Cuba, cuando fue aislada casi totalmente en los años sesenta y, posteriormente, tras la caída del muro de Berlín, cuando el mundo le insinuó y le señaló una y otra vez la necesidad de democratizar su sistema político (al estilo liberal-occidental); pero sus líderes rechazaron este tipo de presiones, precisamente porque la correlación de fuerzas internas le favorece abrumadoramente a los hermanos Castro y al Partido Comunista.

En otras palabras, el golpe de Honduras está cimbrando al sistema interamericano y a la diplomacia tradicional, y emergen estilos nuevos de acción política internacional, no vistos antes en el hemisferio, para lo cual los recursos del “multilateralismo realmente existente” simplemente no están preparados. El retorno no pactado como mecanismo de presión diplomática era la única opción para evitar la consolidación del gobierno de Micheletti.

La izquierda latinoamericana, dividida frente a honduras

No sólo la oea o el presidente Oscar Arias se quedaron sin capacidad de respuesta. A fin de cuentas, la gran perdedora ha sido la izquierda latinoamericana.

En primer lugar, el alba se debilita. Baste observar la discreción de los presidentes de Guatemala y El Salvador, vecinos de Honduras, y su inactivismo político y diplomático con quien parecía ser un aliado. El presidente Colom de Guatemala ya tiene suficiente con las presiones internas de quienes pretenden debilitarlo día tras día.

A Mauricio Funes, de El Salvador, el golpe de Honduras le da argumentos para pedirle a los sectores más radicales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), cercanos a Chávez, que no lo presionen, en aras de la gobernabilidad. Desde la campaña presidencial, Mauricio Funes se mostró abiertamente alejado del chavismo, y al asumir la presidencia se presentó como una opción de izquierda moderada, entre otras razones porque sabe que la correlación de fuerzas en su país no le permite dar virajes hacia la izquierda sin un alto precio político. Virar hacia la izquierda sería una apuesta arriesgada para Funes, pues calentaría los ánimos de la oligarquía que gira alrededor del partido arena, el empresariado, las fuerzas armadas y las clases medias, y él debe ser prudente y mantenerse alejado de Zelaya para no polarizar la situación por razones de estricta estabilidad política.

En México, la reacción de la izquierda fue —por decir lo menos— insípida e incolora, y en América del Sur, se ha ido apagando el entusiasmo por impulsar a toda costa el regreso de Zelaya, aun en gobiernos que lo pusieron como prioridad absoluta de su agenda internacional en el mes de julio. Sobresalía antes del 21 de septiembre el descenso del discurso a favor del retorno de Zelaya de los gobiernos de Argentina,

Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, y ello fue sustituido por un intento venezolano, que tampoco fructificó, para condenar a Colombia por permitir el empleo de siete bases militares por Estados Unidos. Estos gobiernos de izquierda, por cierto con muchos matices y diferencias entre ellos, se alejaban silenciosamente de su política de principios, sin abandonarla, para dar paso a consideraciones realistas derivadas de que el esfuerzo de Zelaya se apaga y cada vez tiene menos adeptos, mientras se consolida el gobierno que sí gobierna en Tegucigalpa. Cabe abrir la pregunta del papel de Brasil en la crisis, pues de repente se convirtió en el fiel de la balanza y obtuvo una importante ventaja geopolítica en Centroamérica; esto se suma a su liderazgo en el Caribe, derivado de la acción de sus fuerzas armadas en Haití.

El corolario de la izquierda, y su inmovilismo, se ve reflejado en la actitud de Cuba ante Zelaya: prácticamente desaparecieron las referencias a la situación de Honduras en el discurso de la diplomacia o del Presidente de Cuba, lo que demuestra la poca importancia que tiene Honduras para Cuba como aliado dentro del alba. Como toque de realismo, de forma inusitada, el gobierno de Micheletti quiere que permanezca la gigantesca misión de médicos cubanos en Honduras, y les brinda todas las facilidades. Por todo lo anterior, Zelaya debía actuar con audacia, pues sólo en el interior del país tiene la oportunidad de hacer algo para evitar la consolidación del golpe, buscando apoyarse en dos factores: el aislamiento internacional de Micheletti y los movimientos populares que se revitalizaron con su retorno el 21 de septiembre.

estados unidos sin energía imperial

Uno de los legados del presidente George W. Bush a su sucesor Barack Obama es la política de la inacción en el hemisferio. Estados Unidos casi abandonó a América Latina durante la era de Bush, debido a que no era un frente de guerra en la lucha contra el terrorismo. Temas como la migración y el narcotráfico siguen estando en la agenda hemisférica de la potencia, sin que altere las relaciones con los gobiernos y sin que la orientación ideológica o política de los presidentes sea la guía. Estados Unidos no se opuso, como lo hubiera hecho en los años cincuenta, sesenta, setenta u ochenta del siglo XX, ni estuvo detrás de ningún intento por impedir la llegada al poder de algún presidente de izquierda. Hugo Chávez, Daniel Ortega, Rafael Correa, Michelle Bachelet, Lula, los Kirchner, Mauricio Funes, Tabaré Vázquez se beneficiaron de esta apatía o inacción imperial, y Bush aprendió, sin grandes dificultades, a convivir con estos gobiernos. Tampoco le quedaban opciones a Bush, pero sin duda respetó el devenir de los acontecimientos políticos.

Ante el golpe de Honduras, para no quedar fuera de la sintonía del hemisferio y también por razones de principios, Estados Unidos condenó la salida de Zelaya, les quitó la visa a funcionarios del gobierno de facto, y suspendió la ayuda militar y otros programas de asistencia. El presidente Obama, para hacer frente a un extraño reclamo que se le hacía, invocó el derecho a la no intervención, gran novedad del discurso

de Estados Unidos, señalando que antes la derecha le pedía a Estados Unidos que interviniera, y ahora lo hacía la izquierda, precisamente para derrocar a un gobierno.

Por supuesto, Obama se ha negado a actuar de forma directa. Otro factor es que el gobierno de Obama se ve inmiscuido en Honduras, lo que ha afectado la lucha en el congreso local. Los demócratas, por razones de principios, piden estar más cerca de América Latina y calificar los hechos como “golpe de Estado”, y los republicanos, a la vieja usanza realista e imperial, desean que se reconozca al gobierno de Micheletti. También como un factor novedoso, Estados Unidos señaló que no reconocería el proceso electoral del 29 de noviembre, cuando uno de los ejes de la política exterior de Estados Unidos era ejercer presión para que los gobernantes de los países se eligieran mediante comicios. En otras palabras, cuando Estados Unidos quiere alejarse de su pasado intervencionista, los gobiernos latinoamericanos le piden que regrese a ser factor de poder.

escenarios

En un inicio, parecía que la presión de casi todos los gobiernos del hemisferio daría frutos. Se pedía el regreso no negociado de Zelaya. Los golpistas lograron resistir y el movimiento popular que respalda a Zelaya se está aislando de la clase política y de lo institucional. Se está configurando un sistema político dual en Honduras, donde lo legal y lo político se enfrenta a la movilización popular. El Partido Liberal al que pertenecía Zelaya se está fracturando muy profundamente entre los sectores antizelayistas que lo controlan ahora, y los que siguen al presidente derrotado están movilizándose en las calles. La pregunta es si logrará sostenerse un movimiento callejero (“piquetero”, le dicen en Argentina) con capacidad de bloquear el proceso electoral del 29 de noviembre. Micheletti deberá evitar a toda costa la represión para no ser acusado de impedir la libre expresión de los zelayistas, pues podría poner en peligro su plan de restauración de la democracia oligárquica hondureña.

Las manifestaciones revitalizadas desde el retorno de Zelaya hasta este momento han mostrado cautela para no provocar la represión masiva, a pesar de que se ha decretado la suspensión de garantías, lo que ha incrementado el aislamiento internacional del gobierno de facto. El retorno de Zelaya y la constancia de las manifestaciones debilitan al gobierno de Micheletti. Éste podría ser sustituido por una personalidad moderada (o una junta provisional de gobierno representativa de los diversos sectores) que pueda organizar las elecciones en condiciones de normalidad. Aquí cabe preguntarse sobre la capacidad de resistencia del gobierno de Micheletti, y las probabilidades de que Zelaya efectivamente gobierne si se pacta su regreso, dado el aislamiento que éste tiene de la política institucional, pues tiene incluso demandas formales de violación de un número importante de leyes. Ninguno de los dos presidentes (el constitucional y el de facto) garantiza que desaparezca la polarización en el sistema político, condición necesaria para un retorno a la normalidad o para la realización de elecciones aceptables para la comunidad internacional.

La presión externa en sí misma no va a lograr que se impida la realización de las elecciones, y eso demuestra la gran debilidad del sistema interamericano al tratar de juzgar o cambiar el devenir de los acontecimientos políticos de un país, a pesar de que, en apariencia, los consensos sobre el desconocimiento de las elecciones sean abrumadores. La ventaja para el gobierno de Micheletti es que los partidos políticos participantes en las elecciones, con sus candidatos elegidos antes del 28 de junio, han aceptado participar, y las campañas están en pleno desarrollo. Esto le otorga la legitimidad suficiente a las elecciones, aunque si se prolonga el estado de sitio o la represión de los zelayistas, de la izquierda y de los movimientos populares, los comicios se pueden desfigurar como mecanismo de solución a la crisis. El movimiento popular debe hacerle frente a una mutación muy difícil: transformar la causa principal de su lucha —el retorno de Zelaya— a un propósito activo de boicot electoral el 29 de noviembre y, posteriormente, seguir expresándose, sobre todo después del 27 de enero del 2010, fecha de la toma de posesión del próximo Presidente, sin la posibilidad de sostener que Zelaya se ostente como Presidente, pues su período de gobierno habrá expirado formalmente. En este sentido, el zelayismo está en la disyuntiva de expresarse a través de algún candidato o partido político o continuar en el camino de la movilización popular en las calles.

Roberto Micheletti (o quien lo pueda sustituir) tratará de que se realicen las elecciones lo mejor posible desde el punto de vista técnico y que sucedan en la fecha programada o en una posterior, a pesar de que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no reconozca el proceso. Si se realizan los comicios y él sigue en el poder, debe entregar la estafeta al ganador el 27 de enero de 2010, con lo que se restauraría la constitucionalidad, pero no se resolvería automáticamente la polarización. Los gobiernos latinoamericanos y del resto del mundo, de forma realista, tendrán que reconocer al nuevo gobierno poco a poco. Si una negociación entre Zelaya, asilado en la embajada de Brasil, con el gobierno o los partidos políticos llegara a consolidarse, se podrían aplazar las elecciones para realizarlas en otra fecha, cuando sea propicio el clima para su desarrollo en condiciones de libertad y de libre competencia. En ellas debería estar presente algún candidato que represente a los zelayistas y al movimiento popular movilizadado en contra del gobierno de facto, pues Zelaya legalmente está impedido para participar.

Si en los años ochenta se reconocía sin dificultad a candidatos que provenían de partidos de derecha o de extrema derecha y sin participación de la izquierda en muchos países de América Latina, y si no se cuestionaba la esencia del proceso electoral, no tendría por qué rechazarse al ganador de un proceso electoral en Honduras. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre este momento y cuando el general Pinochet aceptó realizar el plebiscito el 5 de octubre de 1988, que derivó en la elección de 1989, en la que ganó Patricio Aylwin y se dio pie a la democratización de Chile? Hay muchos ejemplos de elecciones realizadas en condiciones de ausencia democrática en Centroamérica, sobre todo los sucedidos en los ochenta,

en condiciones de guerra civil. Casi todos esos procesos electorales fueron reconocidos finalmente por las fuerzas políticas internas y por la comunidad internacional, y los gobiernos derivados de ellas se tornaron legítimos.

Si no cambia abruptamente el escenario político hondureño, seguramente el ganador de las elecciones será Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 45.22% de los votos en 2005, ante el 50.79% de Zelaya. Dividido el Partido Liberal y la izquierda jugando afuera de la institucionalidad existente, Lobo podría asumir la presidencia, aunque con dificultades, pues tendría que conquistar la legitimidad perdida del sistema político hondureño y de la comunidad internacional. El propósito de una negociación entre Zelaya y los líderes políticos para superar este escenario de polarización sería la restauración de la gobernabilidad.

Hay una enorme cicatriz que marcará por largo tiempo al sistema político hondureño, pues se deben reconstruir los equilibrios políticos entre los líderes hoy ubicados en extremos irreconciliables. La izquierda hondureña, ahora representada por el zelayismo, tendrá que definir cómo participa: si afuera del sistema, como movimiento opositor “antiestablishment” —como, por ejemplo, el de Andrés Manuel López Obrador, en México— o si buscará opciones de reingreso institucional. De cualquier manera, en Honduras habrá triunfado el realismo sobre los principios. El sistema de la oea, principalmente la Carta Democrática Interamericana, mostrará, como en otras ocasiones, sus debilidades.

El factor internacional se vuelve una interrogante frente a los acontecimientos de Honduras. Estados Unidos necesita a Honduras en la guerra contra las drogas, ya que administra con el ejército la base de Soto Cano, conocida como Palmerola y, a pesar de no reconocer al gobierno golpista, la Iniciativa Mérida en su flanco sur está en peligro si cesa la ayuda al gobierno hondureño. Por ello, los intereses de la oea y del Comando Sur no coinciden con el propósito de no reconocer el gobierno de Micheletti o el derivado de las elecciones del 29 de noviembre. En un problema similar se encuentran los países de Centroamérica, pues el conflicto político de Honduras cuestiona gravemente la integración centroamericana en todos los niveles, desde el comercial hasta el militar.

En América Latina, la diplomacia está en aprietos y las doctrinas de muchos gobiernos están en una grave encrucijada, como la de México —que postula de forma casi sagrada la no intervención— o, por el contrario, la de Hugo Chávez, que quiere ser exportada como principio “bolivariano” de intervención a toda costa en los procesos políticos internos de los países, apoyando abiertamente a presidentes o a movimientos populares radicales y que buscan la confrontación. No reconocer un gobierno que se pueda desprender de un proceso electoral llevaría a que pudieran darse situaciones similares en otros países. Esto pondría en entredicho la soberanía y la no intervención como principios de la acción de muchos países, e igualmente consignados en la carta de la oea. Así, en Honduras, la realidad está dándole duros golpes a los principios en los que se cimientan las relaciones entre los países del hemisferio. 4